

El fideicomiso privado de Vicente Fox

Miles de mexicanos se reunieron en el Ángel de la Independencia la noche del 2 de julio del año 2000 para festejar el triunfo de Vicente Fox. Cientos de ellos, eufóricos, levantaron en vilo un féretro con el logo del PRI. Lo paseaban anunciando su muerte. “No les voy a fallar”, vociferó el ganador de las elecciones desde un templete haciendo con la mano derecha la *v* de la victoria. “Hoy, hoy, hoy...”, respondió la gente a gritos uno de los lemas de campaña, aclamando a quien desde la oposición había derrotado al régimen que permaneció en el poder más de 70 años.

Las fotografías del sarcófago le dieron la vuelta al mundo. Ajenos al festejo sobre Paseo de la Reforma, sin conocer el resultado de la elección, los pasajeros de un vuelo comercial de Lufthansa que cubría la ruta México-Frankfurt escucharon al piloto: “Buenas noches. Quiero anunciarles que en México ya hay resultados: el PRI perdió”. De los asientos delanteros se levantó un señor con una copa entre las manos y dijo: “¡Salud!” Los demás aplaudieron. La euforia estaba a flor de piel.

“¿Y ahora qué?”, tituló *Proceso* a la mañana siguiente. “Adiós al PRI”, encabezó *La Jornada* su edición del 3 de julio. “Debacle priísta; nadie domina el Congreso”, publicó *El Universal*. Ese mismo día, Fox le pidió dinero al último de los presidentes priístas,

Ernesto Zedillo, para manejar el periodo de transición: 100 millones de pesos —alrededor de 9 millones 800 mil dólares, según el tipo de cambio en julio del año 2000—, era lo que necesitaba, según sus cálculos.

Con botas negras de charol y un traje oscuro de fino corte, Fox llegó a Los Pinos la tarde de ese 3 de julio de 2000 para encontrarse con el último mandatario del régimen que había derrocado. En esa su primera reunión privada, el guanajuatense, de 52 años de edad, pretendía que además de una bolsa de recursos públicos, el gobierno pusiera a su disposición un avión privado y seguridad, también privada. No le tenía confianza al Estado Mayor Presidencial.

Zedillo rechazó la petición y le informó que el Estado Mayor Presidencial se haría cargo de protegerlo; le proporcionó además la flota de aviones Gruman que serían sólo tripulados por la Fuerza Aérea Mexicana. Respecto del dinero, buscaría la forma de dárselo.

Fox logró derrotar al PRI a fuerza de donativos aportados por los empresarios, pero el escándalo desatado al descubrirse que los Amigos de Fox se apoyaban en un sistema de financiamiento ilegal y paralelo al oficial provocó que la llave de paso se cerrara poco a poco. Llegaron a la noche del 2 de julio con los bolsillos casi vacíos. Había deudas con los dos grandes monstruos de la pantalla chica: Televisa y Televisión Azteca, y con las estaciones de radio también había cuentas por pagar, producto del intenso bombardeo de *spots*, lanzado en el último tercio de la campaña. Como si se tratara de un equipo de fútbol, Fox y sus muchachos estaban contentos con el triunfo, pero desfondados.

Al pie de la escalinata de la casa Miguel Alemán —sitio en donde vivieron los presidentes priístas—, frente a decenas de fotógrafos y camarógrafos, Fox le estrechó firmemente la mano

a Zedillo, a quien durante la campaña criticó siempre que pudo por no tener “cualidades de líder” y por poseer “poca visión de estadista”. Oficialmente se dijo que acordaron convivir en armonía. A partir de ese encuentro privado, que duró unos 45 minutos, ante los ojos de Fox, Zedillo se convirtió en demócrata.

Antes de irse, Fox pidió al *staff* de Zedillo que dejaran pasar a sus hijas, Paulina y Ana Cristina, para que los tres juntos se tomaran una fotografía dentro de la residencia Miguel Alemán. Debajo de ellos, en el sótano de esa construcción estilo francés de dos pisos, permanecían intactos los vestigios del omnímodo poder priísta: una sala de cine, un boliche, una alberca techada, un jacuzzi, un gimnasio, salas de juegos y sitios para fiestas, uno de los cuales había sido transformado en una discoteca para uso de Ernesto Zedillo jr.

Fox llegó ahí acompañado de su entonces inseparable vocera Marta Sahagún, y también de dos de sus amigos: Juan Hernández —uno de los operadores de los Amigos de Fox— y Felipe Zavala —su secretario particular cuando fue gobernador de Guanajuato—. No obstante, el guanajuatense entró solo. “Es un sitio de yesería ostentosa y alardes principescos”, escribió alguna vez Rafael Rodríguez Castañeda, en una crónica publicada por *Proceso*.

Concluida su breve reunión, Fox ofreció una rueda de prensa dentro de Los Pinos, en el Salón Carranza, donde decenas de reporteros mexicanos y extranjeros pretendían recoger sus impresiones tras haber pisado el símbolo del poder priísta mandado a construir en 1942 por Miguel Alemán, el presidente empresario, como lo llamó el historiador Enrique Krauze. Casi 50 años después, un personaje surgido de la oposición estaba allí, donde Gustavo Díaz Ordaz mandó hacer una pista de *go-karts* para que

se divirtieran sus hijos. Justo en el lugar donde José López Portillo ordenó instalar perreras especiales para sus amados mastines.

Casi en tono amable, Fox dijo entonces que la primera etapa del periodo de transición consistiría en presentar proyectos estratégicos y en conocer las *tripas* de las secretarías de Estado. Ni una sola palabra mencionó sobre su intención de que se le diera una tajada del presupuesto, un avión privado y seguridad privada. Años después, la prensa mexicana destacaría la creación de la Ley de Transparencia como uno de los máximos logros de su gobierno.

Ya a solas, Zedillo convocó a una reunión con parte de su *staff*. Como frecuentemente lo hacían, en esos “cuartos de situación” —así los llamaban— expusieron asuntos por resolver, pero ahora el tema que inquietaba eran las exigencias de Fox. El presidente, en ese momento, seguía siendo él, y era su responsabilidad ordenar al Estado Mayor Presidencial que cuidara a su sucesor. Por lo demás, el secretario de Hacienda, José Ángel Gurría, sería llamado para que se pusiera de acuerdo con los foxistas sobre la manera de hacerles llegar los recursos. Eso fue lo convenido.

Durante su campaña Fox vivió uno de sus momentos más exitosos cuando prometió sacar del gobierno a las “tepcatas” y a las “víboras prietas”. A su principal adversario, el candidato priísta Francisco Labastida, en pleno debate transmitido por televisión en cadena nacional, le dijo: “A mí se me podrá quitar lo mal hablado, pero a ustedes lo mañosos y lo corruptos no se les va a quitar nunca”.

Con el triunfo electoral en la bolsa, Fox pretendió que ese viejo régimen le entregara el dinero público antes de tiempo —su posesión sería hasta el siguiente 1 de diciembre— y bajo condiciones especiales, ya que la Cámara de Diputados no había aprobado una partida especial para él y su equipo.

En las largas entrevistas concedidas por los ex presidentes Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas al politólogo Jorge G. Castañeda para el libro *La herencia, arqueología del poder en México*, ninguno de ellos mencionó haber dejado una bolsa de dinero para su sucesor, ni dentro ni fuera del presupuesto. Sus preocupaciones giraban en designar a su heredero, quien, en forma automática, se convertiría en el siguiente inquilino de Los Pinos.

“Para eso estaba la partida secreta de la que siempre gozaron los presidentes del PRI”, dijo Jorge Castañeda cuando se le consultó sobre cómo era la transición antes del año 2000. “El partido, su dirigencia nacional, se hacía cargo de los gastos”, comentó por separado la ex lideresa nacional Dulce María Sauri. “Los empresarios, quienes apoyaban la campaña, seguían poniendo recursos de su bolsa”, admitió Liébano Sáenz, ex secretario particular de Zedillo.

Fox delegó en Carlos Rojas y en Lino Korrodi —otros de sus amigos y coordinadores administrativos del equipo de transición— la responsabilidad de encontrar la ruta para que esos recursos públicos llegaran a sus manos.

La cantidad exigida por los foxistas no era para desestimarse: 100 millones de pesos equivalen a todo lo que pudo invertir la Secretaría de Hacienda en 2006 para la construcción de un puente que uniría a México con Belice. Esa misma cantidad fue la inversión que hizo el gobierno de Veracruz para obras sociales en el municipio de Córdoba en ese mismo año, y 100 millones de pesos fue todo el presupuesto extra con el que contó la Comisión Nacional Forestal para combatir los incendios en el último año del gobierno foxista.

Zedillo estaba consciente de que se necesitaba dinero para operar la transición y no había una partida presupuestal. En lo personal quería entregar el poder de la manera más tersa posible. A sus colaboradores les insistió, en ese último tramo de su mandato, que no quería generar problemas a la gente derivados del cambio, sobre todo cuando por vez primera en muchos años no habría crisis financiera.

Las negociaciones entre Gurría y los delegados foxistas se prolongaron. La encrucijada, para el gobierno, consistió en encontrar una ruta que no pasara por la Cámara de Diputados, ya que, por un lado, no había tiempo —el periodo de transición duraría cuatro meses— y, por el otro, no se quería tener eco en los medios de comunicación, pues el entorno no era del todo favorable. Zedillo vivía un ambiente de animadversión, los legisladores y los gobernadores de su partido lo acusaban de haber entregado el poder al PAN.

Aunque Zedillo ordenó inyectar dinero al equipo de transición, el secretario de Hacienda, José Ángel Gurría, aún no hallaba el procedimiento más seguro. El problema era que el presidente electo y sus colaboradores se impacientaban. En la agenda había ya planes para viajar a Estados Unidos, Canadá y Centroamérica.

Vicente Fox necesitaba dinero, así que llamó de nuevo a sus coordinadores administrativos, Lino Korrodi y Carlos Rojas, para indicarles que consiguieran donativos entre los empresarios, como lo habían hecho en la campaña. Las gestiones con el gobierno eran cosa aparte.

Ambos ya tenían suficiente experiencia. La historia de los Amigos de Fox no concluyó en las urnas la noche del 2 de julio

de 2000, como podría suponerse. En el periodo de transición escribieron un capítulo más de su historia. El sistema diseñado por Korrodi funcionó de nuevo, con la precisión de un reloj suizo y sin hacer ruido; como si se tratase de un motor Mercedes Benz atrajo alrededor de 60 millones de pesos para la causa.

Años más tarde —en 2007—, cuando Lino Korrodi ya vivía una abierta confrontación con su ex amigo Vicente Fox, acorralado por demandas y aún presionado por deudas heredadas de la campaña, explicó cómo movió el dinero durante la transición.

—¿Qué pasó? —le pregunté mientras se sentaba en una pequeña sala dentro de su oficina.

—A mí me dijeron que había que conseguir lana para la transición. Lo que hice fue idear un mecanismo para traer el dinero. Había gente que, eufórica por el triunfo, quería apoyar pero no estaba dispuesta a que su nombre saliera.

—¿Quién se lo pidió? —insistí.

—¡Pues Vicente! —soltó, como si vomitara, las palabras.

—¿Cómo le hicieron?

—Lo que hice fue triangular. El dinero aparentemente se dio por una persona cualquiera, cuyo nombre no llamara demasiado la atención, pero en realidad se trataba de empresarios. Es decir, los recibos salían a nombre de esta persona un tanto cuanto desconocida. Aunque, claro, también hubo algunos que no les importó y los recibos se entregaron en sus manos.

Carlos Rojas no consiguió dinero. “La verdad no tenía tiempo ni para ir al baño”, se excusó cuando charlé con él en sus oficinas de las Lomas de Chapultepec.

Fox nunca se volvió a referir a Zedillo como uno de los presidentes “más burros que había tenido México”, como lo había hecho durante la campaña. Durante las semanas en que

se negociaba la entrega del dinero, Zedillo se transformó en un político responsable ante los ojos de quien se ceñiría al pecho la banda presidencial el siguiente 1 de diciembre.

Cuando presentó en público a su equipo de transición —el lunes 17 de julio del mismo año 2000—, Fox dijo que ni uno solo de sus 20 coordinadores de área cobraría y que sólo habría dinero, lo necesario, para los gastos de operación. Sentados alrededor de dos largas mesas montadas dentro uno de los salones del hotel Fiesta Americana, los foxistas asentían las palabras de su jefe.

“Aquí nadie está cobrando sueldo, empezando por su servidor. Cada uno se agencia sus propios recursos y, por lo tanto, no hay costo de las personas que estamos aquí, frente a ustedes. Hay gastos, y éstos se están viendo con el actual gobierno, la manera en que ellos pueden apoyar: transporte, logística y gastos presupuestales”, advirtió Fox, quien vivía entonces en el hotel Fiesta Americana, ubicado en Paseo de la Reforma, propiedad del empresario Olegario Vázquez Raña. La suite fue cortesía de la casa.

Al día siguiente, en las fotografías aparecidas en los diarios, los foxistas transmitieron la sensación de que serían un grupo de nuevos funcionarios, unidos, dispuestos a desmontar los vestigios del PRI a costa de lo que fuese; pero la falta de dinero los fracturó.

Su enojo lo volcaron hacia el negociador con el gobierno, Carlos Rojas, quien rememoró cómo vivió esa etapa:

Tuve muchas confrontaciones y muy serias con Porfirio Muñoz Ledo y Jorge Castañeda. En una de esas ocasiones, cuando las protestas se desbordaban, les dije en plena junta: “Señores, estamos arreglando este problema y pronto habrá dinero”. Fox les pidió que mejor se pusieran a trabajar.

En esos días, Porfirio Muñoz Ledo, encargado de la Reforma del Estado, llegó pidiendo 200 millones de pesos para sus proyectos. Le dije que cuando hubiera, sólo le podría dar dos, y aunque protestó ante Fox, terminó aceptándolos.

Mientras se concretaba algún acuerdo, Fox y su equipo de trabajo usaban las aeronaves del Estado Mayor Presidencial y pagaban con el dinero que empezaban a recaudar, nuevamente, entre los empresarios. En la gira a Chile, Argentina, Brasil y Uruguay llegaron a bordo de un avión Gulfstream TP-06, tripulado por pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana, pero se hospedaron en hoteles de cinco estrellas pagados por sus amigos.

Ese avión para 11 pasajeros se convertiría en el favorito de Fox y de quien sería su esposa, Marta Sahagún, para viajar los fines de semana al rancho San Cristóbal, en Guanajuato.

Las negociaciones entre los foxistas y los delegados de la Secretaría de Hacienda no lograban avanzar. La tarde del 21 de julio, Lino Korrodi fue el encargado de darle una mala noticia a Fox: no había posibilidad de recibir 100 millones de pesos. Gurría dijo que no podrían darles esa cantidad.

México es uno de los pocos países en el mundo en que el periodo de transición presidencial dura cuatro meses y, sobre todo, con una bolsa de dinero público puesta sobre la mesa para el heredero de la silla. En Chile la transición presidencial dura tres meses, pero este periodo puede reducirse considerablemente si hay segunda vuelta electoral. En Argentina, Cristina Fernández tardó en asumir el poder 42 días después de las votaciones sin que pudiera contar con un solo peso partido por la mitad para hacer sus planes de gobierno.

En 2000, el presidente del cambio en México, Vicente Fox, estaba desesperado por la falta de billetes. Hacía reuniones, llamaba a

cuentas a Korrodi para que le explicara cómo iba con los donativos. El Estado Mayor Presidencial se hizo cargo de su seguridad —a partir del 21 de julio— y, aunque no le gustara, el coordinador sería el general José Armando Tamayo Casillas, hombre con fama de duro entre los militares, exigente dentro del ámbito castrense, “un perro” en labores de inteligencia.

Al principio no le tuvo confianza, pero una semana antes de terminar el sexenio, Tamayo ascendió a general de división, el grado máximo de las fuerzas armadas en México, a propuesta directa del comandante supremo Vicente Fox.

Las negociaciones entre Gurría y los delegados foxistas se alargaron hasta el lunes 14 de agosto de 2000, cuando finalmente el gobierno halló un mecanismo *sui generis* para entregarles el dinero: Se abrió un fideicomiso privado para depositar una primera bolsa de recursos públicos y, en forma paralela, permitirían que los foxistas cobraran por honorarios, mes con mes, como si se tratara de asesores de la propia Hacienda mediante contratos individualizados, hasta el 31 de noviembre de 2000. Aparentemente eran asesores de Hacienda, pero trabajaban para el equipo de transición.

El gobierno de Zedillo diseñó así no una, sino dos bolsas de dinero para los foxistas. “Es por amor a México”, dijo Fox cuando anunció que sus colaboradores no cobrarían.

La pinza de esta maniobra financiera la cerraron Carlos Rojas y Lino Korrodi cuando acudieron —ese mismo lunes 14 de agosto— a Inbursa, propiedad del hoy segundo hombre más rico del mundo, Carlos Slim, para abrir un fideicomiso privado. El titular sería Vicente Fox Quesada, en calidad de ciudadano común y corriente, por lo que cualquier movimiento quedaría protegido por el secreto bancario.

Estos detalles no fueron del dominio público. Los foxistas cerraron la boca. Dentro del gobierno de Zedillo, también. Los diarios, la radio y la televisión prestaban mayor atención a la conformación del gabinete. La tensión política generada por la controvertida elección de Tabasco entretenía a la oposición.

Escoger un fideicomiso privado y no público —como pudieron haberlo hecho— no llamó la atención en 2000. En ese entonces no existía en México la Ley Federal de Transparencia. Los mexicanos, y sobre todo la prensa, no utilizaban esa herramienta para su trabajo cotidiano, a diferencia de lo que sucede ahora, casi a diario.

En 2000, cuando Fox ganó las elecciones, el Grupo Oaxaca —conformado por académicos, investigadores y representantes de los diarios *El Universal*, *Reforma* y *La Jornada*— todavía no concretaba el proyecto de lo que sería la Ley de Transparencia. Daría a luz dos años después.

Por eso no había manera de exigirle cuentas a personas como José Luis Reyes, uno de los amigos de Fox, quien se perfilaba para ocupar alguna cartera en el gabinete de seguridad, por utilizar de un día para otro tres camionetas, una BMW y dos Suburban, todas blindadas; por usar para sus viajes personales una avioneta privada y por rentar como oficinas de la entonces coordinación de seguridad del equipo de transición una casa ubicada en Monte Líbano 320, colonia Lomas de Chapultepec, una de las más caras de México.

Y aunque en ese momento hubiera existido un sistema de rendición de cuentas, había poco que hacer, ya que una parte del dinero se depositó en un fideicomiso privado. Esta cuenta se alimentó con fondos de Hacienda tomados del rubro originalmente destinado a “promover actividades prioritarias” en estados, muni-

cipios y en sectores públicos y sociales, según consta en el reporte presupuestal del año 2000.

El dinero que salió de las arcas de Hacienda hacia el fideicomiso F084/00 de Inbursa fue etiquetado como donativo; así evitaron que los foxistas tuvieran que comprobar su uso.

En la actualidad cualquier donativo del gobierno tiene que comprobarse mediante facturas y recibos. En 2000 la situación era diferente: quienes recibían donativos por parte del gobierno no tenían que comprobar nada.

No es sencillo localizar algún rastro sobre los movimientos contables hechos dentro de Hacienda para registrar el donativo al fideicomiso privado de Fox. Hay que revisar, pausadamente, el estado analítico del capítulo cuatro llamado "Ayudas, subsidios y transferencias" del año 2000 para encontrar apenas un hilo de una gran madeja de números y cifras en el que cualquiera termina por no entender.

Se trata de un archivo de tres hojas en las que aparecen, a primera vista, nombres más conocidos como el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) o la Comisión Nacional para la Protección, ambos con 378 mil pesos; la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) con 327 mil pesos, o el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) con 5 millones 820 mil pesos.

En la última hoja, a unos tres centímetros del final, se puso un rubro llamado "Donativos nacionales" igual a 1 millón 800 mil pesos. Nada más. Ahí dentro está incluido el dinero de las personas que pagan impuestos en México enviado a la cuenta privada de Vicente Fox.

Los foxistas aceptaron sin reparos recibir el dinero de esa

manera. "No había de otra", dice Lino Korrodi, coordinador administrativo del equipo de transición, subiendo los hombros y con cara de que el asunto no importa. "No había nada previsto, era la primera vez que se hacía un cambio de partido. No sé si fue el mecanismo más oscuro pero arábamos en el desierto", me dijo Jorge Castañeda.

—¿Por qué utilizar un fideicomiso privado? —le pregunté a Carlos Rojas.

—Bueno, al secreto bancario se lo pasaron por el arco del triunfo cuando se investigó el caso de los Amigos de Fox, ¿entonces? —atajó.

Depositar en cuentas privadas recursos públicos para gozar del secreto bancario ha sido una de los mecanismos más recurridos, históricamente, por la delincuencia de *cuello blanco*. Las historias sobre cómo se hizo siempre, sobre todo durante los gobiernos del PRI, son innumerables.

En el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), cuando era dirigido por el legendario Joaquín Hernández Galicia, *la Quina*, hay una historia que refleja cómo funcionaba ese sistema. En 1988, Héctor García Hernández, a quien apodaban *el Trampas*, cuando lo acusaban de corrupción envió una carta al presidente Miguel de la Madrid en la que describe cómo es que su líder, *la Quina*, y su subalterno, Salvador Barragán, le ordenaron que él sería el encargado de ir a Pemex a recibir los cheques para el sindicato —producto del cobro por el 2% de cualquier obra adjudicada por la paraestatal— para luego depositar el dinero en una cuenta privada a su nombre en cualquier banco.

Durante 10 años hizo esta labor *hormiga*: cobraba en Pemex —a veces recogía maletas llenas de billetes—, luego depositaba

en su cuenta personal, y cuando se lo pedían sus jefes, les entregaba el dinero, poco a poco. *El Trampas* era secretario de Educación y Previsión Social del sindicato y llegó a tener una fortuna calculada en 5 mil millones de pesos, según describen los periodistas Salvador Corro y José Reveles en su libro *La Quina, el lado oscuro del poder*.

El 18 de septiembre de 2000 es una fecha que difícilmente Fox podrá olvidar. Cuando iniciaba una encerrona con su equipo en Cocoyoc, Morelos —un pequeño poblado caluroso pero con campos de golf, hoteles y fincas para pasar el fin de semana—, el diario *Reforma* publicó que dentro del primer círculo foxista asesores y sus futuros secretarios de Estado ya habían cobrado cada uno 85 mil 300 pesos de salario. El sigilo tendido alrededor del manejo de recursos públicos para la transición se vino abajo estrepitosamente.

Daniel Moreno, entonces reportero de *Reforma*, reveló en la edición de ese martes que los sueldos eran cubiertos directamente por Hacienda. Aquella frase de que sus colaboradores no cobrarían un solo peso “por amor a México”, pronunciada por Fox cuando presentó en público a su equipo de trabajo en el hotel Fiesta Americana, se convirtió en un bumerán que, a la vuelta de unas cuantas semanas, le golpeó directo en la cabeza.

Hacienda autorizó la primera de seis remesas de donativos al fideicomiso privado de Vicente Fox por un monto de 8.5 millones de pesos desde la última semana de agosto (de acuerdo con las fichas de depósito).

La maquinaria de los Amigos de Fox, por otro lado, seguía bien aceitada, trabajando. Fox hacía maletas para su primera gira por Estados Unidos.

Cualquier empleado, ejecutivo o funcionario sabe que cuando sale de viaje, con viáticos pagados, tiene que guardar en su male-

tín los boletos de avión y pedir factura en cada restaurante donde coma y en los hoteles donde se hospede. Al tratarse del presupuesto la cosa es aun más seria. No obstante, con los foxistas la historia fue diferente, ya que el dinero les fue entregado en calidad de donativo.

Cuando Daniel Moreno obtuvo la información sobre el pago al primer círculo foxista buscó a la entonces vocera Marta Sahagún. La información sería publicada al día siguiente. Lejos de ponerse a la defensiva, ésta no sólo le confirmó el monto: 82 mil 500 pesos mensuales, incluso le pidió que fuera a su oficina para mostrarle su recibo. El asunto se lo tomó con calma.

Al siguiente día, cuando los foxistas se preparaban para la encerrona en Cocoyoc, Morelos, el asunto fue desplegado a ocho columnas. El encanto de estar en un hotel colonial, en un pequeño poblado afamado entre la clase media alta por sus fincas para pasar los fines de semana, les dejó un sabor a cobre en la boca.

El presidente electo vivió horas de vértigo. La calma con la que Marta Sahagún tomó el tema de los salarios se le escurrió como un pez entre las manos. Una oleada de críticas lanzadas desde la Cámara de Diputados era impulsada mediante las curules del PRI, donde se pedía la cabeza de Gurría. La izquierda exigía que se devolviera el dinero. En la prensa se restregaba a Vicente Fox su compromiso de que no ganarían un solo centavo.

Aún estaba en circulación la edición del *Reforma*, la noche de ese martes negro para Fox, cuando Hacienda emitió un inédito comunicado de prensa —número 118/00— que dividió en tres partes: Una aclaración y dos puntualizaciones.

En el primer párrafo confesaron que el “Presidente Electo, Sr. Lic. Vicente Fox Quesada” fue quien solicitó al “Presidente Dr. Ernesto Zedillo” un fondo para la transición. Así, de manera

escueta y sencilla, endosaron públicamente al panista la responsabilidad del barullo.

Luego vino la primera puntualización. “Servicios Personales”, la llamaron. Los foxistas eran contratados por honorarios, dentro del rubro dedicado a “servicios personales”. Los contratos vencerían el 31 de noviembre de 2000 y “formarían parte de la Administración Pública Federal”.

Lo que estaban puntualizando es que, en la forma, eran asesores eventuales de Hacienda, aunque en los hechos trabajaran para el equipo de transición. Hay un político muy afamado en México, Jesús Reyes Heróles, quien acuñó una célebre frase: “En la política, la forma es fondo”.

Para amortiguar el escándalo sobre el tema de los salarios y su ilegalidad, que airadamente denunciaban priístas desde la tribuna de la Cámara de Diputados, Hacienda intentó aclarar que, según el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, éstos no podían ganar más que un jefe de unidad, unos 78 mil 800 pesos mensuales. Ése era el tope.

A la fecha —agregaron en ese comunicado de dos cuartillas a renglón seguido—, Hacienda había otorgado 185 contratos de servicios por honorarios con un promedio de 32 mil 263 pesos brutos, que hacen un importe mensual de 5.9 millones de pesos, antes de impuestos.

Y luego remataron lo siguiente, con letras negritas: “En ningún caso los contratos con la SHCP han rebasado el nivel de mando de dirección fijado en la normatividad de la materia”.

Esto fue una mentira.

Cinco años más tarde, cuando Vicente y Marta eran ya “la pareja presidencial” y vivían en una acogedora cabaña en Los

Pinos, remodelada a su gusto, el siguiente secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, fue obligado por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) a entregar los archivos en los que consta que al menos 28 personas, de las 316 contratadas por honorarios, superaron ese tope legal.

En ese privilegiado grupo estaban los colaboradores de Marta Sahagún y otros personajes del foxismo como Alfonso Durazo —secretario particular del presidente—, cuyos salarios iban de los 104 mil hasta 109 mil pesos mensuales, lejos del supuesto tope que aclaró Hacienda, aquel 18 de septiembre de 2000. La manutención del ejército foxista costó 45 millones de pesos, sin contar la otra bolsa de recursos públicos enviada en calidad de donativo al fideicomiso privado de Fox.

Cuando se filtró la información sobre los sueldos del primer círculo foxista —82 mil 500 pesos— no se aclaró por parte del gobierno de Zedillo ni por el del presidente electo que había otros colaboradores que inexplicablemente no sólo superarían el tope legal, sino que sus sueldos, por tan sólo tres meses de trabajo —septiembre, octubre y noviembre—, estarían arriba de los propios coordinadores de área y de evidente mayor responsabilidad, como el fallecido Adolfo Aguilar Zinser y Jorge Castañeda, encargados de la política exterior.

De entre los 15 colaboradores de Fox sólo existe certeza de que cuatro de ellos, Pedro Cerisola, asesor personal del presidente electo y ex director de Aeroméxico; Carlos Rojas, coordinador administrativo de la transición; Javier Usabiaga, responsable del área para atención al campo, y José Luis Romero, encargado del programa de vivienda, donaron sus salarios al fondo para becar a estudiantes pobres.

Un caso aparte es el de Eduardo Romero Ramos. En los tiempos de la transición era un norteño que usaba siempre trajes oscuros y anteojos en forma de gota grande, de esos que estaban de moda en la década de los ochenta. No se sabía mucho de él, salvo que gozaba de toda la confianza de quien sería el “zar anticorrupción”, Francisco Barrio.

Durante el periodo de transición Eduardo Romero —siempre afable— se encargó de diseñar el programa anticorrupción y contra la impunidad. Además, junto con Barrio, elaboró la nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, mediante la cual se pretendía cerrar la llave al derroche del erario. Paradójicamente, este personaje estuvo en ese grupo de foxistas privilegiados que superaron el tope salarial marcado por Hacienda. En tres meses de trabajo arañó los 300 mil pesos.

Cuando Barrio dejó la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, la desaparecida Secodam, para incorporarse como coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, su lugar fue ocupado por Eduardo Romero. Durante su periodo 2003-2006 fue él quien se encargó de soltar el último *no* cuando el IFAI le exigió iniciar una investigación contra Hacienda por negarse a rendir cuentas sobre el fideicomiso privado de Vicente Fox.

La segunda puntualización de aquel inédito comunicado de Hacienda la titularon “Gastos de Operación y Diversos”. Según ellos, la entrega de dinero fue legal, ya que como cualquier otra dependencia podía hacer donativos y ayudas siempre y cuando estuvieran comprendidos dentro del presupuesto y, desde luego, autorizadas en este caso por Gurría.

La discusión en ese entonces entre los diputados era precisamente la legalidad del fideicomiso. Los priístas aseguraban que

ellos no habían aprobado una partida extra. El problema de fondo que pasó desapercibido fue la discrecionalidad con la que los foxistas podían manejar el dinero. Nunca, aun ocho años después, se supo cómo y en qué se gastaron ese dinero, pero ésa es otra historia que merece ser contada a detalle más adelante.

¿Qué donativos se hacían en el año 2000? Hacienda, por ejemplo, donó dinero a un fideicomiso para cajas de ahorro de sus funcionarios, a una cuenta para ahorradores en problemas y computadoras en desuso a organizaciones civiles.

En el comunicado de Hacienda con el cual intentaron explicar el donativo del fideicomiso privado de Fox, se precisó además que habría de llevarse una subcuenta sobre el control de los gastos hechos con el dinero público.

Eso jamás sucedió. A los auditores de la Auditoría Superior de la Federación que intentaron indagar en esa subcuenta, Hacienda les dijo que no había modo de entregarles un solo documento. Se trataba de un fideicomiso privado.

Pero faltaban más explicaciones de Hacienda en aquel comunicado. Según ellos, los recursos aportados al fideicomiso sumaban 8.5 millones de pesos (hasta el 12 de septiembre de 2000) y se encontraría en trámite una aportación adicional por 1.8 millones para alcanzar un total de 10.3 millones de pesos. No habría más dinero.

La realidad es que Vicente Fox recibió más del doble. Entre agosto y noviembre de 2000, la dependencia encabezada por José Ángel Gurría depositó seis remesas de recursos públicos al fideicomiso F/084 de Inbursa por 24 millones 200 mil pesos.

Hacienda registró la salida del dinero en unos pequeños recibos que cualquiera podría tapar con la palma de una mano. Remitente —dice en la parte superior—: Oficina del C. Oficial Mayor.

Beneficiario —indica a la mitad—: Fideicomiso F/084. En la parte final aparecen los montos: Tres millones de pesos entregados el 29 de agosto y 5 millones 500 mil pesos depositados un día después. Ésta fue la primera parte de la inyección de dinero público a la cuenta privada.

“Nada que ocultar, nada de qué avergonzarnos: Vicente Fox”, tituló *El Universal* la nota de la rueda de prensa en la cual el presidente electo intentó dar explicaciones, cuando ya el escándalo por los sueldos estaba en las portadas de la mayoría de los diarios. “El pueblo de México va a saber la verdad y tendrá derecho a toda esa información que, en otro tiempo, era información limitada u oculta”, dijo un día después su inseparable vocera, Marta Sahagún.

El 12 de septiembre de 2000, Hacienda envió 1 millón 800 mil pesos al fideicomiso. Ese mismo día, un martes, el presidente electo tuvo un encuentro con los reporteros que seguían de cerca su gira por Centroamérica para decirles, entre otros asuntos, que su gobierno sería recordado por su política de concordia, transparencia y rendición de cuentas.

En Inbursa había ya 10.8 millones de pesos. Fox no lo sabía, pero faltaban prácticamente unas horas para que se supiera que su equipo sí estaba cobrando. Carlos Castillo Peraza, uno de los ideólogos del panismo actual, había muerto de un fulminante paro cardíaco en Bonn, Alemania. Su cuerpo, durante esos momentos, era trasladado hacia la ciudad de México.

La imagen de aquel candidato que tundió a patadas un féretro del PRI durante los mítines advirtiendo que acabaría con la corrupción fue cuestionada al descubrirse que recibió dinero del régimen derrocado.

“Los coordinadores del equipo de transición cobramos del fideicomiso abierto en Inbursa”, me aseguró Korrodi. “No

—atajó Rojas—. Nunca se autorizaron sueldos de ese fondo; en todo caso Lino Korrodi les pagó del dinero que le quedaba en las cuentas de los Amigos de Fox.”

Los encargados de la administración del equipo de transición se guardaron estas explicaciones durante ocho años.

Uno de los panistas que levantó la voz para defender a los foxistas fue el entonces coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Felipe Calderón. El diputado priísta, Jorge Chávez Presa, advirtió desde la tribuna que había graves violaciones a la Constitución. La perredista Miroslava García exigió que se devolviera el dinero a Hacienda.

En el Senado, Gurría prácticamente fue acorralado, puesto contra la pared por los legisladores de su partido cuando lo llamaron a comparecer. Era la primera vez en la historia de México que acontecía algo así. Los tricolores, como el tabasqueño Óscar Cantón, estaban enfurecidos. A gritos, desgañitándose, manoteaba: “Bajo qué criterios Hacienda crea un fideicomiso privado con donativos públicos, por qué se ignora al Congreso”.

Gurría no hizo más que apegarse, a pie juntillas, al inédito comunicado de prensa, aunque subrayando que se había contratado a 178 personas por honorarios —en realidad el ejército foxista llegó a tener 315 integrantes— y que se habían enviado ya 8.5 millones de pesos al fideicomiso, aunque existía una petición hecha por el propio Vicente Fox para ampliarlo hasta 10.8 millones de pesos. Lo cual tampoco era cierto.

Lo mismo decía ese boletín del 19 de septiembre de 2000, los fondos del fideicomiso llegarían hasta 10.8 millones de pesos. Gurría bajó de la tribuna sin escuchar aplausos, cuando el PRI era una sola pieza. Las palmas se las llevó Cantón, el legislador tabas-

queño que lo amenazó hasta con abrirle un juicio político. Los priístas estaban cobrando facturas a Ernesto Zedillo, según ellos, por haber entregado el poder al PAN.

Pero la verdad es que hubo más dinero para Fox. Este supuesto tope de 10.8 millones de pesos se desmoronó fácilmente el 5 de octubre siguiente, cuando Hacienda depositó en Inbursa una remesa más, ahora por 2 millones 200 mil pesos. Con éste ya iban cuatro envíos. Y faltaban más.

El presidente electo estaba acorralado por sus propias palabras, aunque en ese entonces no hubiera manera de saber cuánto dinero había en el fideicomiso. De gira por Xalapa, Veracruz, les dijo a los reporteros que lo seguían por el país: "Así como ustedes tienen un sueldo, nosotros también".

—¿Cuánto gana? —le cuestionaron de botepronto.

Fox no respondió.

—¿El presidente electo tiene salario? —insistieron los reporteros.

—Todos sí, nosotros no. Daremos a conocer un boletín sobre esto.

—Pero, ¿cuál es su salario? —preguntaron de nuevo.

—Así como ustedes tienen un sueldo, nosotros también.

Aun faltaban los depósitos más cuantiosos. El 22 de noviembre Hacienda inyectó otros 4 millones 900 mil pesos y el 27 del mismo mes cayeron en el fideicomiso privado de Fox 6 millones 750 mil pesos más. Faltaban unos cuantos días para la toma de posesión y, de acuerdo con Hacienda, el dinero era para operar la transición.

En una crónica publicada por *El Universal*, se detalla que Fox estrenaría dos trajes en su toma de posesión diseñados especialmente para él por la prestigiada firma internacional Ermenegildo

Zegna. Uno de los trajes, el más claro, lo portaría en la ceremonia ante el Congreso de la Unión, y el otro —un poco más oscuro— lo luciría en el evento del Auditorio Nacional. La marca Ermenegildo Zegna se distingue por su línea elegante y sobria, quizá por eso se convirtió en la favorita no sólo de Fox, sino también de su esposa Marta Sahagún.

Unos días antes de que Fox rindiera protesta como presidente de la República, Carlos Rojas confesó públicamente que grandes transnacionales mexicanas como Teléfonos de México, Cementos Mexicanos y Grupo Alfa habían aportado al fideicomiso 30 millones de pesos.

Sumando los donativos obtenidos por Lino Korrodi —alrededor de 60 millones de pesos—, más los 24 millones de pesos donados por el gobierno, en el fideicomiso a nombre de Vicente Fox se manejaron no menos de 84 millones de pesos.

La preocupación de la prensa mexicana era entonces conocer los nombres de los miembros del gabinete. Fox jugaba con una terna para la Secretaría de Hacienda. Sus candidatos eran el propio Gurría, Luis Ernesto Derbez y Francisco Gil. A dos de éstos los tenía cerca.

Uno de ellos, Derbez, era su amigo y le debía el haber creado los Amigos de Fox, y el otro, aunque priísta, se encargó de transferirle recursos públicos para el equipo de transición.

A los 24 millones de pesos depositados en Inbursa habrá que sumarle los 45 millones de pesos pagados a los 316 personajes inscritos en la nómina de Hacienda. Esa cantidad —unos 69 millones de pesos— equivale a lo que recientemente pudo aportar el municipio de Morelia, Michoacán, para cubrir los servicios de alumbrado público y mantenimiento de parques, jardines y mercados. Esta ciudad que cuenta con unos 650 mil habitantes.

En Brasil, por ejemplo, el periodo de transición presidencial dura tres meses y no hay dinero público de por medio. Entre 2002 y 2003, el Partido de los Trabajadores pidió un préstamo de 1.8 millones de dólares al Banco de Minas para financiar los actos de Luiz Inacio *Lula* da Silva, en tanto rendía protesta. En México, Vicente Fox obtuvo tan sólo del erario 69 millones de pesos; es decir, más de 6 millones de dólares, de los cuales una parte fue depositada en una de sus cuentas personales.

Ya como presidente, Fox propuso ante la ONU a Gurría para dirigir la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Desde septiembre de 2005, el ex secretario de Hacienda vive en París.